

INE/CG909/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LAS COALICIONES “VA POR MÉXICO” Y “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO”, INTEGRADAS POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SUS CANDIDATOS A PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI LA C. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA, A DIPUTADO LOCAL, EL C. FRANCISCO BRIAN ROJAS CANO Y A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO VII CON CABECERA EN CUAUTITLÁN IZCALLI LA C. JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX.

Ciudad de México, a 22 de Julio de dos mil veintiuno.

VISTO, para resolver el expediente con clave **INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El quince de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de la Junta Distrital Ejecutiva número 7 del Instituto Nacional Electoral, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el escrito de queja presentado por los CC. Juan Pablo Loredó Bautista y Juan Guadalupe Mendoza Cruz, en su carácter de Representantes Propietarios del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de Cuautitlán Izcalli, del Instituto Electoral del Estado de México y ante el Consejo Distrital 07 de Cuautitlán Izcalli del Instituto Nacional Electoral respectivamente, en contra de la Coalición “Va por el Estado de México”¹, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución

¹ Al analizar que los sujetos incoados estaban postulados para cargos Federal y Locales; se estableció que si bien el promovente solo hizo referencia a la Colación “Va por el Estado de México”, lo cierto es que el cargo Federal corresponde a la integrada por los mismos partidos cuya denominación es “Va por México”.

Democrática, así como de sus candidatos a Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la C. Karla Leticia Fiesco García, a Diputado Local por el Distrito XLIII, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, denunciando hechos que consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de México. (Fojas 1-52 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS

(,,)

SEXTO. - Con fecha 30 de abril esta Representación advirtió que, de manera generalizada, en el territorio que abarca el Municipio de Cuautitlán Izcalli, se distribuyeron ejemplares del Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, cuyo contenido y tiraje puede constituir infracciones a la normatividad en materia electoral, lo anterior pues, claramente constituye propaganda electoral susceptible de reporte y fiscalización en el informe de campaña correspondiente.

Lo anterior, ya que como se demostrará y argumentará en los apartados siguientes, el contenido del Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, constituye claramente propaganda electoral susceptible de reporte y fiscalización en el informe de campaña correspondiente, esto es así en razón de que, por una parte, se trata de publicidad inserta y no reportada y/o por otra parte, en su caso, se trata de una aportación o donativo en especie por una persona moral, circunstancias, ambas, que contravienen las disposiciones de la materia electoral en su vertiente de fiscalización de los recursos utilizados en el actual Proceso Electoral que se desarrolla en el Estado de México, en específico en el Municipio de Cuautitlán Izcalli.

2. DERECHO TRANSGREDIDO

Una vez precisado lo anterior, resulta importante contextualizar las implicaciones que tienen los hechos antes denunciados dentro del marco de un Proceso Electoral, lo anterior a fin de demostrar que la publicación denunciada, y de la cual

no existen dudas respecto de su distribución en el Municipio de Cuautitlán Izcalli durante el Proceso Electoral constituyen infracciones que violentan el principio de equidad en la contienda. Se explica.

Falta de reporte de gasto en medios impresos

Por principio, debe señalarse que el artículo 199 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, establece que se entenderán como gastos de campaña los de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos ya sean inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto.

Ahora bien, el artículo 242 de la Ley Electoral señala que se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las y los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

*En este sentido, la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la propaganda electoral se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o **desalentar la preferencia hacia un candidato, candidata, coalición o partido político** y que debe considerarse como tal todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña electoral, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir expresiones que les identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial.*

*Ahora bien, en términos de los criterios de la Sala Regional contenidos en la tesis LXIII/2015 de la Sala Superior, de rubro **GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN**, para la identificación de publicaciones que deban contabilizarse como gasto de campaña se deben acreditar de manera simultáneamente los elementos siguientes:*

- a. **Finalidad.** La publicación generó un beneficio al partido político y su candidata para obtener el voto ciudadano; ello pues se trató de posicionar la candidatura o **su intención es desalentar la preferencia hacia un candidato, candidata, coalición o partido político.***
- b. **Temporalidad.** La propaganda se realizó en período **de campaña electoral.***
- c. **Territorialidad.** La publicación se realizó en **un diario de la entidad en la que se llevó a cabo el Proceso Electoral.***

Establecido lo anterior, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 211 del Reglamento de Fiscalización:

(...)

Aportación o donación indebida

Resulta relevante indicar lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso i) en relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra señalan:

(...)

Dichos preceptos normativos, imponen la prohibición a determinados sujetos y por ende la obligación a los Partidos Políticos Nacionales, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular de no aceptar por parte de aquellos cualquier tipo de aportación, ya sea en dinero o en especie.

Los partidos políticos tienen diversas maneras para allegarse de recursos, sin embargo, la normatividad electoral impone restricciones para ello, una de ellas estriba que determinados sujetos no deben aportar a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Así las cosas, queda la prohibición expresa contenida en el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en el sentido de que las personas a que ahí se hace referencia no podrán realizar aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestar servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a los sujetos obligado.

Esto, en virtud de que a pesar de que la Ley es suficientemente clara al respecto, se considera necesario dejar constancia de que quedan prohibidas tales prácticas de las empresas de carácter mercantil; asimismo, los sujetos obligados no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades ni recibir aportaciones de personas no identificadas.

De esta manera, cuando la autoridad electoral, en este asunto la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral cuya competencia de origen se actualiza en el caso concreto, advierta la existencia de aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestación de servicios personales o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de las personas contenidas en el artículo 54, numeral 1 de la Ley electoral, hacia los sujetos obligados; se configura el incumplimiento a la normatividad electoral.

*En este orden de ideas, es claro que el artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, prescribe la prohibición a los partidos políticos de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie, por sí o interpósita persona, entre otros, **de empresas mexicanas de carácter mercantil.***

*Así entonces, **la proscripción de recibir aportaciones de empresas mercantiles responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de las personas jurídicas mencionadas,** esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de los intereses particulares de las empresas en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con la propia actividad democrática.*

La ratio legis de dicho artículo se traduce en la necesidad de que los Partidos Políticos Nacionales o locales, en tanto entidades de interés público, se encuentren en libertad de realizar sus fines sin que exista vinculación alguna con intereses privados de carácter mercantil.

En otras palabras, la norma persigue como finalidad mantener al margen de los procesos democráticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial.

Por otro lado, tratándose de los procesos populares de elección de cargos públicos, la norma intenta impedir que esa contienda por el poder se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma.

En efecto, éste es otro de los valores que la prohibición pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos.

Por lo tanto, por la capacidad económica de las empresas mercantiles y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad comercial que realice, se prohíbe a las empresas mercantiles realizar aportaciones a los partidos políticos.

Lo anterior, tiene sentido en cuanto al presente caso, pues una de las modalidades por las cuales una persona moral puede pretender influir en un Proceso Electoral es a través de una aportación en especie a favor de una opción política, al respecto, debe considerarse el criterio de la Sala superior contenido en la tesis XIV/2010 cuyo rubro y contenido es el siguiente:

**'PROPAGANDA ELECTORAL. NO DEBE TENER CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES A LAS DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).
(...).'**

Por último, se señala la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de gastos de campaña establecidos para cada una de las elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los candidatos que participen para contender por una candidatura a algún cargo de elección popular deberán adecuarlos conforme al tope establecido para tal efecto.

Conclusiones.

Una vez realizadas los requerimientos y diligencias necesarias para acreditar la infracción en la conducta denunciada, deberá sancionarse a la Coalición Va Por México y a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por no cumplir con su obligación de reportar los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, reporte que deberá incluir una relación de cada una de las inserciones que se amparan en la factura, las fechas de su publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas.

*Asimismo, y en caso de que no medie un contrato por la propaganda que se contiene en el Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, se actualizaría la infracción contenida en el artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, el cual prescribe la prohibición a los partidos políticos de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie, por sí o interpósita persona, entre otros, **de empresas mexicanas de carácter mercantil.***

En ambos casos, se solicita que las personas físicas y morales sean sancionadas conforme a la normatividad de la materia conforme a la gravedad de la falta y la correspondiente individualización de la sanción.

Así también, se solicita expresamente que el monto involucrado en la producción y distribución de la propaganda electoral contenida en el Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, sea acreditada al tope de gastos de campaña de la Coalición Va Por México respecto de las candidaturas que fueron beneficiadas con dicha propaganda, como se explicará en los párrafos siguientes.

3. ANÁLISIS y CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN DENUNCIADA

Al respecto, de la simple lectura del contenido del periódico "Punto Medio" de fecha 30 de abril de 2021 pueden observarse las siguientes notas y encabezados:

En la portada:

- *"Rechazan 'imposición' del Candidato de Morena"*
- *"Acusan a Daniel Serrano de Extorsionar a 'Ediles Puros'"*
- *"Fuertes señalamientos contra líder de 'Los Puros'"*

En la página 2:

- *"Denunciaron a Daniel Serrano ante Fiscalía; Núñez presentó quejas"*
- *"Reclama 'conflicto de intereses' del Representante de Morena"*
- *"Llevó su protesta a Palacio Nacional y a la sede de Morena"*

En la página 3:

- *"Acusan a Daniel Serrano de extorsionar a alcaldes"*
- *"Alcaldesa de Los Reyes asegura que le pidió 2 millones, la de Teoloyucan se quejó"*
- *"Daniel Serrano se 'autoimpuso' como candidato a la Alcaldía de Izcalli"*
- *"Marco Galindo se dice ganador de la encuesta; lanza fuertes críticas y señalamientos"*

En las páginas 4 y 5:

- *"Candidatas a la diputación federal"*

En la página 6:

- *"Joanna vs. Xóchitl, para la diputación federal"*
- *"'Puro Pueblo organizado', decía el slogan...."*
- *"De los archivos de 'Cayetano'"*

En la página 7:

- *"Razones y rozones"*
- *"Imposiciones + fascismo=4T"*
- *"Inicio de Campaña electoral para presidente municipal en C.I."*

Ahora bien, además de las notas y encabezados antes referidos, se advierte del contenido del Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, que se insertan las siguientes fotografías, las cuales, como se explicará

*en los párrafos siguientes, tienen por finalidad **desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político, en el caso, Luis Daniel Serrano Palacios, así como a Morena y la Coalición 'JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO'.***

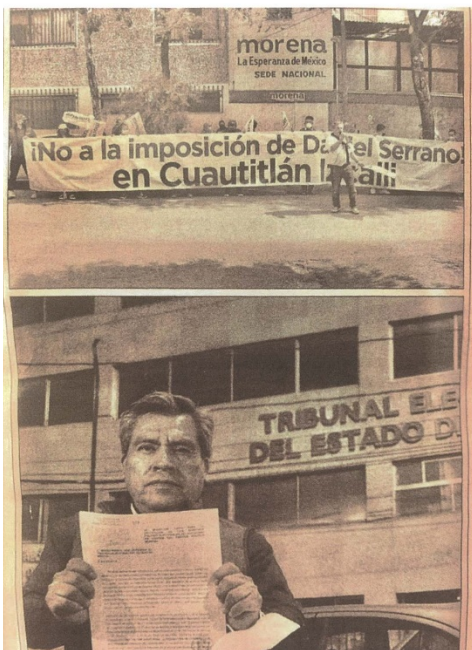
Es claro que con dicha propaganda disfrazada de notas periodísticas y columnas de opinión se beneficia a las candidaturas de la Coalición Va por México, es concreto a Karla Leticia Fiesco García candidata a la Presidencia Municipal:

Consecuentemente, al desalentar la preferencia ciudadana por un candidato por medio de propaganda negativa, es claro que se beneficia a las candidaturas de la Coalición Va por México a través de propaganda disfrazada de notas periodísticas y columnas de opinión, en concreto a Karla Leticia Fiesco García candidata a la Presidencia Municipal; a Joanna Alejandra Felipe Torres candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a Francisco Brian Rojas Cano candidato a diputado por la misma Coalición, por el Distrito Electoral local 43, todos ellos quienes compiten por las candidaturas señaladas dentro del Municipio de Cuautitlán Izcalli, como se evidencia a continuación:

En la página Portada:



En la página 2:



En la página 2:



En la página 6:



Ahora bien, de los encabezados y notas antes referidas se advierte el siguiente contenido:

En la portada:

‘Acusen a Daniel Serrano de Extorsionar a ‘Ediles Puros’

‘El proceso interno de Morena para seleccionar a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en el Estado de México, se vio “manchado” por presuntas violaciones a la convocatoria; la incertidumbre y denuncias de madruguetes y de imposiciones no se hicieron esperar

En este marco acusaron de presuntos actos de extorsión al líder morenista de los llamados ‘Puros’, Daniel Serrano Palacios, quien habría pedido millones de pesos a algunos de los alcaldes afines a su grupo, para utilizarlos en esta campaña’

‘Fuentes señalamientos contra líder de ‘Los Puros’

Marco Galindo, quien era uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, se quejó de la forma en que se llevó el proceso interno donde, Daniel Serrano Palacios, quien fungía como representante del partido ante el IEEM, aprovechó su posición para ‘autorregistrarse’ como candidato; acción que calificó como ‘autoimposición’.

En la página 2:

‘Denunciaron a Daniel Serrano ante Fiscalía; Núñez presentó quejas’

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli con licencia y aspirante de Morena para la reelección, Ricardo Núñez Ayala, presentó una denuncia formal ante la FEDE (Fiscalía Especial de Delitos Electorales) en contra de Daniel Serrano

Palacios, por los ‘señalamientos y conductas que pueden ser constitutivas de delitos graves en materia electoral.’

‘Llevó su protesta a Palacio Nacional y a la sede de Morena’

‘El presidente municipal con licencia, Ricardo Núñez Ayala, cumplió lo expresado en la conferencia de prensa, en el sentido de realizar una manifestación en el Zócalo capitalino y en la sede nacional de Morena, en donde entregó escritos para manifestar su inconformidad y exigir que se restituya el proceso interno. ‘

En la página 3:

‘Acusan a Daniel Serrano de extorsionar a alcaldes’

‘Este domingo, cierre de registros de candidatos en el IEEM, estuvo enmarcado por las protestas y consignas en contra de Daniel Serrano, quien, por cierto, fue el que se registró para ser el candidato a la presidencia de Cuautitlán Izcalli

El domingo pasado, en la sede del IEEM, en donde se anunció la alianza entre Morena-PT-Nueva Alianza, un grupo de simpatizantes de Morena gritaron consignas en contra, no solo de Daniel Serrano, sino que también, en contra de Isaac Montoya, delegado especial de Morena en el estado, a quien acusaron de traidor’

‘Daniel Serrano se ‘autoimpuso’ como candidato a la Alcaldía de Izcalli’

Marco Galindo, quien era uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, se quejó de la forma en que se llevó el proceso interno donde, Daniel Serrano Palacios, quien fungía como representante del partido ante el IEEM, aprovechó su posición para "autorregistrarse" como candidato; acción que calificó como ‘autoimposición’.

.....

‘El aspirante a la candidatura sentenció que, si bien él ganó la nominación en la encuesta y Daniel Serrano se la adjudicó a la mal, aún no todo está dicho, de tal suerte que esperarán a ver las ratificaciones de las candidaturas, sobre todo por las acusaciones de extorsión que pesan en su contra, por parte de sus propias presidentas municipales del grupo de ‘Los Puros’ que lidera’

En la página 6:

‘La Vitrina’

'Que complicado panorama se le vino al 'Dany Daniel Puro Jalapeño' ... Como que este tema de la candidatura a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, a la que aspira como que se está poniendo muy al rojo vivo Resulta ser que, muchos, por no decir que casi todo el mundo, no vio bien que él jugara el papel de 'Juez y parte' en la contienda; y si bien, en teoría, iba a ser la 'Comisión Nacional de Elecciones' la que decidiera sobre las nominaciones, el hecho de que él estuviera como representante del partido ante el IEEM, lo colocaba en una situación 'privilegiada' en comparación con los demás contendientes'

En la página 7:

'Razones y rozones'

'Imposiciones + fascismo=4T'

'Inicio de Campaña electoral para presidente municipal en C.I.'

Los rozones: el fascismo es una ideología, un movimiento político, que exalta el sentimiento nacionalista; nació el siglo pasado y lo que una a sus integrantes es la oposición violenta a las reglas. Es un régimen autoritario.

....

Mentira que en este momento gobierna la Izquierda; los partidos de ultraderecha son los que exaltan el nacionalismo, los que consideran a la prensa como un adversario, (le suena a la realidad).

Si el fascismo se ve amenazado, entonces comienza a condenar a las instituciones, a las personas que exhiben sus corruptelas y busca hacerse el mártir y condenar a quien se opone a sus ideas: políticos, intelectuales, prensa, etc. Y a todos ellos, los muestra como adversarios.

Si lo que escribo le parece semejante a algo que estamos viviendo en la actualidad, pues no es coincidencia, es una realidad, peligrosa y cruel.

El imponer candidatos, en este Proceso Electoral, es una muestra de totalitarismo, a la usanza fascista; entonces, si estos elementos se combinan en la 4T, estamos frente a un gobierno fascista y autoritario.

Los de Morena son fascistas, ellos son los de ultra derecha.

Como puede advertirse del contenido de la publicación denunciada esta no cumple con los criterios que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación ha desarrollado para determinar que nos encontramos ante un auténtico ejercicio periodístico.

La anterior, se afirma pues contiene 10 notas periodísticas de las cuales 6 son claramente contrarias a Luis Daniel Serrano Palacios y Morena, de las restantes 4 notas, 2 son favorables a "Paco Rojas Vive", es decir, FRANCISCO BRIAN ROJAS CANO quien es candidato a diputado de la Coalición Va por el Estado de México, por el Distrito Electoral local 43.

En cuanto a las 2 restantes notas periodísticas, una de ellas es favorable a la candidata a diputada por el Distrito Electoral 7 federal del Partido Verde Ecologista de México, Erika Vianey López.

*La nota restante, es una comparación entre las candidatas a la diputación del Distrito Electoral 7 federal Xóchitl Zagal de Morena y **Joanna Alejandra Felipe Torres** de la coalición Va por México, al respecto, de la lectura de esa nota puede apreciarse que principalmente se destacan los logros de la candidata **Joanna Alejandra Felipe Torres** y claramente se minimizan los logros de la candidata de Morena.*

*Una vez descrito el contenido Periódico 'Punto Medio', año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, puede advertirse que el mismo no corresponde a un ejercicio de periodismo libre que pueda ampararse en las garantías constitucionales y convencionales concebidas para ello, es evidente que se trata de una simulación que tiene como finalidad encubrir propaganda electoral, la cual tiene por objeto **desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político, en el caso, Luis Daniel Serrano Palacios, así como a Morena y la Coalición 'JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO'.***

*Es claro que con dicha propaganda disfrazada de notas periodísticas y columnas de opinión se beneficia a las candidaturas de la Coalición Va por México, es concreto a **Karla Leticia Fiesco García** candidata a la Presidencia Municipal; a **Joanna Alejandra Felipe Torres** candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a Francisco Brian Rojas Cano candidato a diputado por la misma Coalición, por el Distrito Electoral local 43, todos ellos quienes compiten por las candidaturas señaladas dentro del Municipio de Cuautitlán Izcalli.*

En consecuencia, dicha publicación debe ser contabilizada como gasto de campaña a cargo de la Coalición Va por México y los partidos que la integran en sus candidaturas a los distintos cargos de elección popular que se disputan en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dentro del presente Proceso Electoral, aunado a que deberá considerarse que tal publicación es una aportación indebida de un ente prohibido por la Ley, ello, en términos de las siguientes consideraciones y con base en el análisis que antecede.

4. INFRACCIONES QUE SE ACREDITAN

Por principio, debe tenerse por acreditado que, con base en la descripción del contenido de las notas periodísticas, columnas y fotografías señaladas en el apartado que antecede, es claro que el contenido del Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, constituye propaganda electoral susceptible de reporte y fiscalización en el informe de campaña correspondiente, pues no corresponde a un ejercicio periodístico que se ampare bajo la garantía de libertad de expresión, ello en términos de lo siguiente:

*La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al dictar las sentencias de los recursos SUP-RAP-0474-2011, así como en el SUP-RAP-0121-2014, entre otros, determinó que, en relación con la propaganda política, las leyes de la materia disponen que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, programa o plataforma política de partido político o la invitación a ser afiliado a este; en ese sentido, afirmó que el propio orden legal señala **que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito de promover la obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.***

*Así, continua la Sala Superior, debe entenderse que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular determinadas conductas políticas, **en tanto que la propaganda electoral tiene un propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas ideas o desalentar esa preferencia,** así, mientras la primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico; la segunda está íntimamente ligada a la campaña de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar a acceder al poder.*

*En atención a lo anterior, **para determinar si un mensaje, inserción, publicación, escrito, imagen o expresión constituyen propaganda electoral es necesario realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante un Proceso Electoral.***

*Consecuentemente, y de acuerdo con los criterios de la Sala Superior, **los límites al ejercicio del derecho a la información por parte de los periodistas, tiene como finalidad evitar posibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar, posicionar o denostar a un candidato o partido político, con***

independencia de si el medio de comunicación (periódico, revista, radio, televisión etc.) recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita.

*En este contexto, resulta relevante valorar la publicación denunciada de acuerdo a la Tesis **LXIII/2015** de Sala Superior de rubro **GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN**, en la cual se establecen **los elementos indispensables** para identificarla como propaganda electoral y, en consecuencia, acreditar las infracciones que se denuncian en la presente queja:*

(...)

Los aspectos antes referidos tienen sustento en los artículos 41 Base II de la Constitución General de la República; 210, 242 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto y 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que establecen que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales.

Asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso.

*Por último, de la interpretación de dichos artículos se desprende **que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial.***

*Así entonces, con sustento en el marco legal y criterios sustentados por la Sala Superior, debe estimarse que el contenido del periódico "Punto Medio" de fecha 30 de abril de 2021, constituye propaganda electoral que, por una parte, beneficia a los candidatos de la Coalición Va por México, es específico a **Karla Ileticia Flesco García** quien se postula a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli; a **Joanna Alejandra Felipe Torres** candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a Francisco Brian Rojas Cano quien es candidato a diputado por la misma*

*Coalición, por el Distrito Electoral local 43 y, por otro, **desalienta la preferencia electoral hacia Luis Daniel Serrano Palacios candidato a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia en el Estado de México’.***

Por tanto, y con sustento en los apartados que preceden, es claro que el test de análisis de la publicación denunciada, bajo el marco legal y criterios desarrollados, nos lleva a concluir que, efectivamente, nos encontramos ante una publicación cuyo contenido debe ser considerado como propaganda electoral, ello, pues se actualizan los elementos que la Sala Superior ha establecido para calificarlos de esa forma. Se explica.

Finalidad. *Este elemento implica que se genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; situación que se actualiza del contenido de las notas periodísticas, columnas y fotografías de la publicación denunciada.*

*La anterior, se afirma pues se contienen 10 notas periodísticas de las cuales 6 son claramente contrarias a Luis Daniel Serrano Palacios y Morena, es decir, el candidato a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México; 2 notas son favorables a Francisco Brian Rojas Cano candidato a diputado de la Coalición Va por el Estado de México, por el Distrito Electoral local 43; y, 2 de las restantes notas periodísticas, una de ellas es favorable a la candidata a diputada por el Distrito Electoral 7 federal del Partido Verde Ecologista de México, Erika Vianey López y la última es una comparación entre las candidatas a la diputación del Distrito Electoral 7 federal Xóchitl Zagal de Morena y **Joanna Alejandra Felipe Torres** de la Coalición Va por México, de la cual puede apreciarse que se destacan los logros de la candidata **Joanna Alejandra Felipe Torres** y se minimizan los logros de la candidata de Morena.*

*Por ello, es evidente que, se beneficia a las candidaturas de la Coalición Va por México, es concreto a Karla Fiesco candidata a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli; a **Joanna Alejandra Felipe Torres** candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a Francisco Brian Rojas Cano candidato a diputado por la misma Coalición, por el Distrito Electoral local 43.*

*Lo anterior, pues al contener una mayoría de notas **negativas hacia Luis Daniel Serrano Palacios candidato a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia en el Estado de México’**, así como a Xóchitl Zagal candidata a la diputación federal por el 7 Distrito de Morena y al propio partido, ello inhibe las preferencias electorales de estos últimos y favorece la percepción de los citados candidatos de la Coalición Va por México, con lo que se beneficia a sus candidaturas.*

Así entonces, con base en las argumentaciones antes desarrolladas debe tenerse por acreditado el elemento relativo a la **Finalidad**.

Temporalidad. Este elemento se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él.

En el propio periódico denunciado puede apreciarse, tanto en la portada como en la página 6, que la misma se publicó y distribuyó a partir del 30 de abril de 2021, esto es, cuando la campaña electoral local y federal ya había dado inicio, es decir, dentro del periodo considerado en la Tesis de la Sala Superior.

En cuanto al elemento relativo a la finalidad de la misma y su beneficio a un partido político, coalición o candidatura, esté ya ha sido argumentado y demostrado en el párrafo que antecede, consecuentemente, debe tenerse por acreditada **Temporalidad**.

Territorialidad. Elemento que consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo la actividad denunciada.

Al respecto, en el 'Directorio' contenido en la parte inferior de la página 6 puede apreciarse que textualmente se indica:

*'Distribuido por Juan Nieblas Meza y la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A. C., en **Cuautitlán Izcalli, Estado de México**, C.P. 54740'*

(El énfasis es propio)

Aunado a lo anterior, del contenido de la totalidad de las notas periodísticas y columnas puede advertirse que en cada una de ellas se hace referencia a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es decir, el Municipio donde **Luis Daniel Serrano Palacios es candidato a la Presidencia Municipal por la Coalición 'Juntos Haremos Historia en el Estado de México', así como a Xóchitl Zagal quien es candidata de Morena a la diputación federal por el 7 Distrito.**

En términos de lo anterior, debe tenerse por acreditado el elemento relativo a la **Territorialidad**.

Determinado lo anterior, esta Representación hace énfasis en que **la publicación denunciada no puede ampararse en las garantías de libertad de expresión,**

en su vertiente de libertad de prensa, consagradas en los artículos 1º, 6º Y 7º, de la Constitución General de la República; así como, 19 párrafos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior, pues **esta garantía no es absoluta**, ya que, como se desarrolló en los párrafos que anteceden, tiene límites y más aún cuando se ven afectados los principios constitucionales que rigen los procesos electorales, como lo son la equidad, legalidad y la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos en las campañas electorales.

Al respecto, y **con sustento en los citados criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir propaganda electoral**, éstos deben quedar sujetos a determinados límites.

Así, de acuerdo a tales criterios, las notas periodísticas deben contener, idealmente, limitaciones las cuales, como se explica en cada caso, no son cumplidas en el periódico denunciado, como se demuestra a continuación:

- **Objetividad.** Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos deben desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones del reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones en el electorado.

Circunstancia que no acontece en el caso denunciado, pues evidentemente las notas, columnas e incluso las fotografías no contienen información que sea objetiva para la ciudadanía, pues en todas ellas se hace una crítica negativa hacia Morena, la Coalición 'Juntos Haremos Historia en el Estado de México', y los candidatos antes referidos.

Al respecto, se hace énfasis en que dicha carga negativa en las notas, columnas y fotografías únicamente se encuentra dirigida hacia Morena, la Coalición 'Juntos Haremos Historia en el Estado de México', y los candidatos aludidos, circunstancia que evidencia la clara intención de desalentar la intención de voto a su favor, por lo que, el contenido del periódico 'Punto Medio' de fecha 30 de abril de 2021, debe ser considerado como propaganda electoral.

- **Imparcialidad.** El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor opción, o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus propuestas.

Al respecto, y como se acreditó en el apartado correspondiente al Análisis y contenido de la publicación denunciada, la mayoría de las notas periodísticas y la totalidad de las columnas denostan a Luis Daniel Serrano Palacios candidato a la Presidencia Municipal por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", así como a Xóchitl Zagal candidata de Morena a la diputación federal por el 7 Distrito, por tanto, la publicación denunciada evidentemente no es imparcial.

- **Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia de las notas periodísticas.** *Si una nota periodística se caracteriza por proporcionar mayor información que cualquier otro género periodístico, entonces es claro que dicha nota debe encontrarse debidamente identificada como tal y la información que busca proporcionar tiene que encontrarse debidamente contextualizada, de tal forma que no se genere confusión en el electorado.*

Circunstancia que en el caso no acontece, las notas periodísticas contenidas en el Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, evidentemente son en su totalidad negativas hacía Luis Daniel Serrano Palacios candidato a la Presidencia Municipal por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", así como a Xóchitl Zagal candidata de Morena a la diputación federal por el 7 Distrito, sin que exista una contextualización de las mismas.

- **Forma de distribución.** *En el caso la distribución masiva del periódico denunciado adquirió tintes de propaganda electoral al distribuirse en determinada zona geográfica, es decir, de manera consistente y constante se repartió entre el electorado de Cuautitlán Izcalli.*

*Por tanto, al concentrarse en esta región y no en otra parte del Estado de México, es evidente que el Periódico 'Punto Medio', año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, debe considerarse como propaganda electoral y contabilizarse como tal a cargo de la Coalición Va Por México y sus candidatos, en específico a **Karla Leticia Fiesco García** candidata a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli; a **Joanna Alejandra Felipe Torres** candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a **Francisco Brian Rojas Cano** candidato a diputado por la misma Coalición, por el Distrito Electoral local 43.*

- **Período de distribución.** *Dada la posibilidad que los reportajes políticos en torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, hagan referencia a propuestas políticas, o bien, los candidatos lleven a cabo actos de promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral.*

Como ya se explicó con anterioridad, el periódico denunciado se publicó y distribuyó, por lo menos, a partir del 30 de abril de 2021, esto es, cuando la campaña electoral local y federal ya había dado inicio.

*Así entonces, de las circunstancias de hecho y de derecho acreditadas y argumentadas en el cuerpo de la presente denuncia debe resolverse que el contenido del Periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021, constituye propaganda electoral susceptible de reporte y fiscalización en el informe de campaña correspondiente a cargo de la Coalición Va Por México y sus candidatos, en específico a **Karla Leticia Fiesco García** candidata a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli: a **Joanna Alejandra Felipe Torres** candidata a la diputación federal por el 7 Distrito y a Francisco Brian Rojas Cano candidato a diputado por la misma Coalición, por el Distrito Electoral local 43.*

Lo anterior pues, por una parte, se trata de publicidad inserta y no reportada o por otra, en su caso, de una aportación o donativo en especie por una persona moral, circunstancias, ambas, que contravienen las disposiciones de la materia electoral en su vertiente de fiscalización de los recursos utilizados en el actual Proceso Electoral que se desarrolla en el Estado de México, en específico en el Municipio de Cuautitlán Izcalli.

(...)"

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- Un ejemplar del periódico "Punto Medio" correspondiente al año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021

III. Acuerdo de recepción y prevención. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, integrar el expediente, notificar la recepción al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; así como prevenir a los quejosos a efecto de que aportaran circunstancias de modo, tiempo y lugar que enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y su evidencia correspondiente, toda vez que no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 53-55 del expediente).

IV. Notificación de recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22495/2021, la Unidad Técnica

de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la recepción del escrito de queja y la prevención al quejoso. (Fojas 56-57 del expediente).

V. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22494/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la recepción del escrito de queja y la prevención al quejoso. (Fojas 58-59 del expediente).

VI. Notificación de la recepción del escrito de queja y prevención al quejoso.

- a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México notificara el acuerdo de recepción del escrito de queja y prevención a los CC. Juan Pablo Loredó Bautista y Juan Guadalupe Mendoza Cruz, en su carácter de Representantes Propietarios del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de Cuautitlán Izcalli, del Instituto Electoral del Estado de México y ante el Consejo Distrital 07 de Cuautitlán Izcalli del Instituto Nacional Electoral respectivamente. (Fojas 60-61 del expediente).
- b) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JDE07-MEX/VS/0333/2021 se notificó el acuerdo de la recepción del escrito de queja y prevención al C. Juan Guadalupe Mendoza Cruz, para que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del oficio, aportara las pruebas necesarias que soporten sus aseveraciones. (Fojas 73-84 del expediente).
- c) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JDE07-MEX/VS/0334/2021 se notificó la prevención al C. Juan Pablo Loredó Bautista, para que, en un término de setenta y dos horas contados a partir de la notificación del oficio, aportara las pruebas necesarias que soporten sus aseveraciones. (Fojas 85-96 del expediente).
- d) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, se recibió en la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral el escrito de desahogo de la prevención signado por los CC. Juan Pablo Loredó Bautista y Juan Guadalupe Mendoza Cruz, en su carácter de Representantes Propietarios del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de Cuautitlán Izcalli, del Instituto

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

Electoral del Estado de México y ante el Consejo Distrital 07 de Cuautitlán Izcalli del Instituto Nacional Electoral respectivamente. (Fojas 64-71 del expediente).

- e) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JDE07-MEX/VS/0346/2021 signado por el Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México, se remitió el desahogo de la prevención. (Fojas 62-63 del expediente)
- f) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/UTF/133/2021 signado por el Enlace de Fiscalización del Estado de México, se remitieron las constancias de notificación de los oficios INE-JDE07-MEX/VS/0333/2021 e INE-JDE07-MEX/VS/0334/2021. (Foja 72 del expediente).

VII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento administrativo sancionador de queja, integrar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno, llevar a cabo las notificaciones al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos denunciados. (Fojas 97-98 del expediente).

VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de queja.

- a) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 99 del expediente)
- b) El diez de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de recepción y la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 127 del expediente)

IX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de quejoso. El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27271/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la

Representación del Partido Morena ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 106-108 del expediente).

X. Notificación y emplazamiento la admisión del procedimiento de queja a la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27272/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento de mérito a la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de los elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 115-120 del expediente).
- b) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-257/2021, el Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 139-148 del expediente):

“(…)

*En atención al oficio número **INE/UTF/DRN/27272/2021** recibido por mi representada el 9 de junio de 2021, signado por la Maestra Jaqueline Vargas Arrellanes, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en cumplimiento a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo a comparecer dentro del expediente de cuenta, integrado con motivo de la infundada queja promovida por los representantes del Partido Político **MORENA** en contra de mi representada, así como de sus candidatas y candidato, a los distintos cargos de elección popular **Karla Leticia Fiesco García, Francisco Brian Rojas Cano y Joanna Alejandra Felipe Torres**, señalados en la misma, por tanto, expongo las siguientes consideraciones:*

PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

*Antes de manifestar lo que al derecho de mi representada corresponde, respecto de la vista que esa autoridad fiscalizadora hiciera en torno al procedimiento instaurado dentro del expediente identificado con la clave **INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX**, resulta oportuno resaltar que, en términos de lo*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

dispuesto por el artículo 79, apartado 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; los institutos políticos se encuentran obligados a presentar informes de precampaña y campaña, conforme a las reglas siguientes:

...

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de 30 días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada período.

...

Como se puede apreciar del apartado trasunto, los partidos políticos cuentan con un plazo de treinta días para presentar los informes de ingresos y gastos por cada periodo a partir de que dan inicio las campañas, informes que se entregan a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los tres días siguientes a que concluya cada periodo.

De acuerdo a la fecha que obra en el oficio por el que se comparece a través de esta vía, al momento en que se concibe requerir a mi representa por la supuesta existencia de elementos que podrían implicar la probable comisión de irregularidades en materia de fiscalización, se estaba dentro del plazo legal para presentar el informe de gastos, por lo que, atendiendo al Principio del Mal Menor la responsable se encontraba obligada a esperar la culminación de los tiempos para presentar los informes de gastos de campaña y atendiendo al artículo 80, apartado 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, en caso de percatarse la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de errores u omisiones en la documentación soporte y contabilidad presentada, informar al Partido Acción Nacional para que en un plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniese, de ahí que, ante el oficio que fuera turnado a mi representada se puede advertir la existencia de una vulneración al Principio de Presunción de Inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual le resulta aplicable al procedimiento por el que se acude en defensa de mis derechos.

Lo anterior tiene por objeto dejar en claro que el inicio del procedimiento de queja y/o sancionador se encuentra viciado, ya que lejos de analizar la información que mi representada ha exhibido ante el Instituto Nacional Electoral a través de los sistemas electrónicos instrumentados para tal fin, solicita aclaración bajo un tono violatorio de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar lo siguiente:

'Es pertinente señalar que si el sujeto obligado no precisa las referencias de las cuales se pueda constatar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, al no indicarse en qué registro, póliza, factura,

anexo o detalle de muestra se encuentra sustentada una operación contable de ingreso o gasto en el SIF, resultaría inviable pretender que esta autoridad efectúe una revisión oficiosa de la totalidad de la documentación que aportó el sujeto obligado, máxime que las observaciones de los ingresos y gastos correspondientes que no se encontraron subsanadas serán hechas de su conocimiento de manera previa a la aprobación de la resolución que en Derecho proceda.'

*De lo anterior se desprende que, la autoridad fiscalizadora pretende que sea el gobernado quien corra con la carga de probar el dicho en una denuncia, con lo que vulnera el **PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**.*

Ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Estado, a través de las autoridades administrativas competentes, como lo es la fiscalizadora, se encuentra obligado a la observancia de ciertos principios jurídicos por cuyo conducto se tutelan los mandatos constitucionales que respecto de la facultad punitiva del Estado se han consagrado en el texto normativo fundamental, a favor de los gobernados. Lo anterior porque, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador (en materia de fiscalización), resultan ser dos unívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado o "ius puniendi", entendido como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

*En este tenor, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, deviene en calidad de lógica consecuencia que, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador para la instauración del procedimiento sancionador en materia de fiscalización, **puede acudirse a los principios sustantivos del derecho penal en la instrumentación del procedimiento y en la aplicación de sanciones**.*

Así lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J 99/2006¹, cuyo rubro y texto son los siguientes:

'DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.' (...)

Son justamente los principios que históricamente han construido la dogmática penal actual, como son, entre otros, la presunción de inocencia, el principio de tipicidad, el principio "pro homine" y el principio "non reformatio in peius", los que solicito sean aplicados en la instrucción y resolución de este procedimiento

sancionador en materia de fiscalización, basándome para ello en las siguientes razones de hecho y derecho.

a) Principio de presunción de inocencia. Como se anticipó, la premisa inicial de mi declaración radica en la inocencia del suscrito en contra de todos los actos imputados en relación con la supuesta omisión de reportar ingresos y/o gastos.

Dicha inocencia radica, como se verá en capítulos subsecuentes, en la inexistencia de violación jurídica alguna a los deberes que me imponían las diversas disposiciones electorales en materia de fiscalización. Empero, a pesar de que en los apartados siguientes se desarrollarán los argumentos por lo que, en mi concepto, no existe transgresión normativa alguna, conforme al principio de presunción de inocencia corresponde en todo caso a esa autoridad fiscalizadora demostrar a plenitud la configuración de las infracciones legales que el actor me ha imputado, debiendo en todo momento presumir mi inocencia durante la instrucción y resolución del procedimiento oficioso; lo anterior, al margen de los asertos jurídicos que el suscrito pueda exponer durante su desahogo, pues los mismos se arguyen con el único objeto de corroborar la inocencia que se invoca, **no para demostrarla.**

Una vez realizado lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

I. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS.

De manera inicial, me permito señalar que mi representada en ningún momento ha violentado la norma electoral, como lo señala el denunciante.

Ello es así, pues en su escrito de queja aduce que tanto mi representada como las candidatas y **candidatos Karla Leticia Fiesco García, Candidata a Presidente Municipal de Cuautitlan Izcalli, Estado de México, Francisco Brian Rojas Cano, candidato a Diputado Local por el Distrito XVIII, en el Estado de México, y Joanna Alejandra Felipe Torres**, Candidata a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, incurrieron en presuntas violaciones en materia de fiscalización.

Por lo anterior, y con la finalidad de dar clara respuesta a los señalamientos inferidos por el denunciante, me permito señalar lo siguiente:

a) .- Respecto al señalamiento relativo a la falta de reportar gastos por concepto de contratación de medios impresos, así como la supuesta aportación indebida, particularmente, por lo que se refiere a la publicación contenida en el Periódico **“PUNTO MEDIO”**, año 18, edición 768 de fecha 30 de abril del 2021, me permito señalar lo siguiente:

*En primer término, me permito señalar que no le asiste la razón al denunciante pues, la aseveración de que mis representado, así como **sus candidatos contrataron o adquirieron de forma indebida es falsa**, debido a que este, sostiene que el contenido que refiere como propaganda en favor de los candidatos denunciados, así como en contra de los candidatos de MORENA, parte de una premisa fundamental que es la inexistencia de una relación contractual mediante la cual se pueda asegurar que esta estaba encaminada a la conformación de los extremos denunciados.*

Es así que el quejoso, parte del error al pretender demeritar la manera en la que, en pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y ejercicio periodístico, el medio informativo realiza la publicación de las notas denunciadas, con lo que pretende demeritar y restar valor al derecho a la información de la ciudadanía.

Tal y como se han delineado diversos criterios por parte de la Autoridad Jurisdiccional, respecto a que el ejercicio al derecho a la información produce la obligación del Estado y las entidades de interés público, de rendir cuentas a la sociedad, así como a justificar todo acto o acción, en atención de los principios de máxima publicidad y transparencia, con lo que evidentemente se debe de analizar bajo una mirada menos restrictiva, cuando se trate de información de interés público que sitúa como centro del debate las acciones de los que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, es así que del análisis del contenido no se desprende que la información vertida en la notas denunciadas partan de expresiones propagandísticas, que promuevan alguna candidatura en particular, pues tal y como el propio quejoso lo señala se plantean notas e información de diversos partidos las cuales se pueden calificar tal vez como positivas negativas o neutrales, más sin embargo no como propaganda o promoción.

Aunado a lo anterior podemos señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 7°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública.

Tal y como lo establece la Jurisprudencia 15/2018, en el sentido de plantear que la presunción de licitud de la que goza la labor periodística o de prensa, sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística, esto es así pues de los hechos narrados se advierten condiciones en las que no se puede acreditar un

exclusividad de contenido o posicionamiento expreso sobre un partido político o candidato.

...

‘Jurisprudencia 15/2018

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. ‘

Por otro lado, respecto a la consideración respecto a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que con la aparición de ciertos elementos se puede determinar algún beneficio en favor de partido o candidato alguno, de acuerdo a los siguiente:

[...]

Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:

‘a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.’

[...]

En ese sentido, la autoridad deberá de realizar un análisis respecto a los nombres e imágenes que aparecen en la publicación señalada, pues estas no son exclusivas de un partido o candidato, así como que la información proporcionada no se establece como propaganda si no como, la cuenta de hechos públicos y notorios, pues de igual forma aparecen candidatos y partido que no forman parte de los hechos denunciados.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta autoridad deberá de arribar a la conclusión de que mi representada, así como los candidatos señalados en ningún momento incurrieron en violaciones en materia de fiscalización, pues de todas las probanzas y consideraciones señaladas en la presente contestación, por lo que procede declarar inexistentes las conductas atribuidas, ya que no se realizó contratación de los medios impresos referidos por el denunciante.

(...)

III. ALEGATOS.

Desde este momento, solicito que se tengan por ofrecidas, todas aquellas alegaciones que se desprendan del contenido integral del presente escrito y que benefician a mi representada.

Ahora bien, resulta evidente que la conducta imputada por la parte quejosa no se encuentra acreditada, y parte de premisas falsas y equivocadas, por tanto, no debe determinarse contravención a la norma, mucho menos, sanción alguna.

Lo anterior, se insiste, toda vez que mi representada cumplió a cabalidad con los ordenamientos en materia de fiscalización que nos ocupan.

En esos términos y por las razones sostenidas, resulta evidente que la queja de cuenta es infundada.

(...)

XI. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27273/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento de mérito a la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de los elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 109-114 del expediente).
- b) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 149-157 del expediente):

“(...)

*En atención al oficio número **INE/UTF/DRN/27273/2021** recibido por el 9 de junio de 2021, signado por la Maestra Jaqueline Vargas Arrellanes, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en cumplimiento a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo a comparecer dentro del expediente de cuenta, integrado con motivo de la infundada queja promovida por los representantes del Partido Político **MORENA** en contra de mi representada, así como de sus candidatas y candidato, a los distintos cargos de elección*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

popular **Karla Leticia Fiesco García, Francisco Brian Rojas Cano y Joanna Alejandra Felipe Torres**, señalados en la misma, por tanto, expongo las siguientes consideraciones:

PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

*Antes de manifestar lo que al derecho de mi representada corresponde, respecto de la vista que esa autoridad fiscalizadora hiciera en torno al procedimiento instaurado dentro del expediente identificado con la clave **INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX**, resulta oportuno resaltar que, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, apartado 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; los institutos políticos se encuentran obligados a presentar informes de precampaña y campaña, conforme a las reglas siguientes:*

...

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por períodos de 30 días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada período.

...

Como se puede apreciar del apartado trasunto, los partidos políticos cuentan con un plazo de treinta días para presentar los informes de ingresos y gastos por cada periodo a partir de que dan inicio las campañas, informes que se entregan a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los tres días siguientes a que concluya cada periodo.

De acuerdo a la fecha que obra en el oficio por el que se comparece a través de esta vía, al momento en que se concibe requerir a mi representa por la supuesta existencia de elementos que podrían implicar la probable comisión de irregularidades en materia de fiscalización, se estaba dentro del plazo legal para presentar el informe de gastos, por lo que, atendiendo al Principio del Mal Menor la responsable se encontraba obligada a esperar la culminación de los tiempos para presentar los informes de gastos de campaña y atendiendo al artículo 80, apartado 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, en caso de percatarse la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de errores u omisiones en la documentación soporte y contabilidad presentada, informar al Partido Acción Nacional para que en un plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniese, de ahí que, ante el oficio que fuera turnado a mi representada se puede advertir la existencia de una vulneración al Principio de Presunción de Inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual le resulta aplicable al procedimiento por el que se acude en defensa de mis derechos.

Lo anterior tiene por objeto dejar en claro que el inicio del procedimiento de queja y/o sancionador se encuentra viciado, ya que lejos de analizar la información que mi representada ha exhibido ante el Instituto Nacional Electoral a través de los sistemas electrónicos instrumentados para tal fin, solicita aclaración bajo un tono violatorio de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar lo siguiente:

‘Es pertinente señalar que si el sujeto obligado no precisa las referencias de las cuales se pueda constatar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, al no indicarse en qué registro, póliza, factura, anexo o detalle de muestra se encuentra sustentada una operación contable de ingreso o gasto en el SIF, resultaría inviable pretender que esta autoridad efectúe una revisión oficiosa de la totalidad de la documentación que aportó el sujeto obligado, máxime que las observaciones de los ingresos y gastos correspondientes que no se encontraron subsanadas serán hechas de su conocimiento de manera previa a la aprobación de la resolución que en Derecho proceda.’

*De lo anterior se desprende que, la autoridad fiscalizadora pretende que sea el gobernado quien corra con la carga de probar el dicho en una denuncia, con lo que vulnera el **PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**.*

Ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Estado, a través de las autoridades administrativas competentes, como lo es la fiscalizadora, se encuentra obligado a la observancia de ciertos principios jurídicos por cuyo conducto se tutelan los mandatos constitucionales que respecto de la facultad punitiva del Estado se han consagrado en el texto normativo fundamental, a favor de los gobernados. Lo anterior porque, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador (en materia de fiscalización), resultan ser dos unívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado o “ius puniendi”, entendido como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

*En este tenor, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, deviene en calidad de lógica consecuencia que, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador para la instauración del procedimiento sancionador en materia de fiscalización, **puede acudirse a los principios sustantivos del derecho penal en la instrumentación del procedimiento y en la aplicación de sanciones**.*

Así lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J 99/2006¹, cuyo rubro y texto son los siguientes:

'DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO' (...)

Son justamente los principios que históricamente han construido la dogmática penal actual, como son, entre otros, la presunción de inocencia, el principio de tipicidad, el principio "pro homine" y el principio "non reformatio in peius", los que solicito sean aplicados en la instrucción y resolución de este procedimiento sancionador en materia de fiscalización, basándome para ello en las siguientes razones de hecho y derecho.

a) Principio de presunción de inocencia. Como se anticipó, la premisa inicial de mi declaración radica en la inocencia del suscrito en contra de todos los actos imputados en relación con la supuesta omisión de reportar ingresos y/o gastos.

*Dicha inocencia radica, como se verá en capítulos subsecuentes, en la inexistencia de violación jurídica alguna a los deberes que me imponían las diversas disposiciones electorales en materia de fiscalización. Empero, a pesar de que en los apartados siguientes se desarrollarán los argumentos por lo que, en mi concepto, no existe transgresión normativa alguna, conforme al principio de presunción de inocencia corresponde en todo caso a esa autoridad fiscalizadora demostrar a plenitud la configuración de las infracciones legales que el actor me ha imputado, debiendo en todo momento presumir mi inocencia durante la instrucción y resolución del procedimiento oficioso; lo anterior, al margen de los asertos jurídicos que el suscrito pueda exponer durante su desahogo, pues los mismos se arguyen con el único objeto de corroborar la inocencia que se invoca, **no para demostrarla.***

Una vez realizado lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

I. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS.

De manera inicial, me permito señalar que mi representada en ningún momento ha violentado la norma electoral, como lo señala el denunciante.

Ello es así, pues en su escrito de queja aduce que tanto mi representada como las candidatas y candidatos Karla Leticia Fiesco García, Candidata a Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Francisco Brian Rojas Cano, candidato a Diputado Local por el Distrito XVIII, en el Estado de México, y Joanna Alejandra Felipe Torres, Candidata a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, incurrieron en presuntas violaciones en materia de fiscalización.

Por lo anterior, y con la finalidad de dar clara respuesta a los señalamientos inferidos por el denunciante, me permito señalar lo siguiente:

*a) .- Respecto al señalamiento relativo a la falta de reportar gastos por concepto de contratación de medios impresos, así como la supuesta aportación indebida, particularmente, por lo que se refiere a la publicación contenida en el Periódico “**PUNTO MEDIO**”, año 18, edición 768 de fecha 30 de abril del 2021, me permito señalar lo siguiente:*

*En primer término, me permito señalar que no le asiste la razón al denunciante pues. la aseveración de que mis representado, así como **sus candidatos contrataron o adquirieron de forma indebida es falsa**, debido a que este, sostiene que el contenido que refiere como propaganda en favor de los candidatos denunciados, así como en contra de los candidatos de MORENA, parte de una premisa fundamental que es la inexistencia de una relación contractual mediante la cual se pueda asegurar que esta estaba encaminada a la conformación de los extremos denunciados.*

Es así que el quejoso, parte del error al pretender demeritar la manera en la que, en pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y ejercicio periodístico, el medio informativo realiza la publicación de las notas denunciadas, con lo que pretende demeritar y restar valor al derecho a la información de la ciudadanía.

Tal y como se han delineado diversos criterios por parte de la Autoridad Jurisdiccional, respecto a que el ejercicio al derecho a la información produce la obligación del Estado y las entidades de interés público, de rendir cuentas a la sociedad, así como a justificar todo acto o acción, en atención de los principios de máxima publicidad y transparencia, con lo que evidentemente se debe de analizar bajo una mirada menos restrictiva, cuando se trate de información de interés público que sitúa como centro del debate las acciones de los que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, es así que del análisis del contenido no se desprende que la información vertida en la notas denunciadas partan de expresiones propagandísticas, que promuevan alguna candidatura en particular, pues tal y como el propio quejoso lo señala se plantean notas e información de diversos partidos las cuales se pueden calificar tal vez como positivas negativas o neutrales, más sin embargo no como propaganda o promoción.

Aunado a lo anterior podemos señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 7°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier

medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública.

Tal y como lo establece la Jurisprudencia 15/2018, en el sentido de plantear que la presunción de licitud de la que goza la labor periodística o de prensa, sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística, esto es así pues de los hechos narrados se advierten condiciones en las que no se puede acreditar un exclusividad de contenido o posicionamiento expreso sobre un partido político o candidato.

‘Jurisprudencia 15/2018

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA’ (...)

Por otro lado, respecto a la consideración respecto a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que con la aparición de ciertos elementos se puede determinar algún beneficio en favor de partido o candidato alguno, de acuerdo a los (sic) siguiente:

[...]

Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:

“a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.”

[...]

En ese sentido, la autoridad deberá de realizar un análisis respecto a los nombres e imágenes que aparecen en la publicación señalada, pues estas no son exclusivas de un partido o candidato, así como que la información proporcionada no se establece como propaganda si no como, la cuenta de hechos públicos y notorios, pues de igual forma aparecen candidatos y partido que no forman parte de los hechos denunciados.

*Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta autoridad deberá de arribar a la conclusión de que mi representada, así como los candidatos señalados en ningún momento incurrieron en violaciones en materia de fiscalización, pues de todas las probanzas y consideraciones señaladas en la presente contestación, por lo que procede declarar inexistentes las conductas atribuidas, **ya que no se realizó contratación de los medios impresos referidos por el denunciante.***

(...)

III. ALEGATOS.

Desde este momento, solicito que se tengan por ofrecidas, todas aquellas alegaciones que se desprendan del contenido integral del presente escrito y que beneficien a mi representada.

Ahora bien, resulta evidente que la conducta imputada por la parte quejosa no se encuentra acreditada, y parte de premisas falsas y equivocadas, por tanto, no debe determinarse contravención a la norma, mucho menos, sanción alguna.

Lo anterior, se insiste, toda vez que mi representada cumplió a cabalidad con los ordenamientos en materia de fiscalización que nos ocupan.

En esos términos y por las razones sostenidas, resulta evidente que la queja de cuenta es infundada.

(...)"

XII. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27274/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento de mérito a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de los elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 100-105 del expediente).
- b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 128-138 del expediente):

"(...)

Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/27274/2021, notificado en la oficina que ocupa la Representación

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 9 de junio del 2021, estando en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación al emplazamiento realizado al instituto político que se representa.

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

‘QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA.-‘

(...)

‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCION LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-‘

(...)

‘PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. ‘

(...)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los

elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

*Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de los CC. **Joanna Alejandra Felipe Torres, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 7 del estado de México**, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; **Francisco Brian Rojas Cano, candidato a la Diputación Local por el Distrito Electoral Local 43, del Estado de México**, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por*

*los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y **Karla Leticia Fiesco García, candidata a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli**, postulada por la coalición electoral “VA POR MÉXICO”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditará con la documentación que en su oportunidad remitirá el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó.*

Es importante destacar que en los convenios de coalición electoral “VA POR MÉXICO”, se determinó que al Partido Acción Nacional, le correspondía postular las candidaturas la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 7 del estado de México, a la Diputación Local por el Distrito Electoral Local 43, del Estado de México y a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli, por ende, dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidata denunciada.

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

(...)”

XIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27266/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión de queja. (Fojas 121-123 del expediente).

XIV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27268/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión de queja. (Fojas 124-126 del expediente).

XV. Razones y Constancias.

- a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

Federal de Electores SIIRFE, con la finalidad de ubicar el domicilio del C. Francisco Brian Rojas Cano. (Fojas 158-160 del expediente).

- b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda de la página de internet del periódico "Punto Medio" <https://www.periodicopuntomedio.com/>, con la finalidad de verificar la existencia de esta. (Fojas 161-163 del expediente).
- c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda realizada en la evidencia aportada por los quejosos, con la finalidad de obtener datos de identificación y/o ubicación del periódico Punto Medio. (Fojas 164-168 del expediente).
- d) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda realizada en <https://www.google.com/>, con la finalidad de ubicar el domicilio del C. Juan Nieblas Meza, editor del periódico Punto Medio. (Fojas 208-212 del expediente).
- e) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda de los domicilios de las CC. Karla Leticia Fiesco García y Joanna Alejandra Felipe Torres. (Fojas 213-214 del expediente).

XVI. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a la C. Karla Leticia Fiesco García.

- a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29734/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó a la C. Karla Leticia Fiesco García, corriéndole traslado de la totalidad de las constancias de prueba que integraban el expediente (Fojas 169-181 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XVII. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja al C. Francisco Brian Rojas Cano.

- a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29735/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó al C. Francisco Brian Rojas Cano, corriéndole traslado de la totalidad

de las constancias de prueba que integraban el expediente (Fojas 182-194 del expediente).

- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XVIII. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a la C. Joanna Alejandra Felipe Torres.

- a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29736/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó a la C. Karla Leticia Fiesco García, corriéndole traslado de la totalidad de las constancias de prueba que integraban el expediente (Fojas 195-207 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XIX. Requerimiento de información a la C. Karla Leticia Fiesco García.

- a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31847/2021, se le requirió información a la C. Karla Leticia Fiesco García respecto de los hechos denunciados. (Fojas 247-254 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XX. Requerimiento de información al C. Francisco Brian Rojas Cano.

- a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31848/2021, se le requirió información al C. Francisco Brian Rojas Cano respecto de los hechos denunciados. (Fojas 239-246 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XXI. Requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional.

- a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31853/2021, se le requirió información Representante del Partido

Revolucionario Institucional respecto de los hechos denunciados. (Fojas 223-230 del expediente).

- b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio SFA/465/2021, el Secretario de Finanzas y Administración del CEN del PRI atendió el requerimiento. (Foja 275 del expediente).

XXII. Requerimiento de información al Partido Acción Nacional

- a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31851/2021, se le requirió información al Representante del Partido Acción Nacional respecto de los hechos denunciados. (Fojas 231-238 del expediente).
- b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-0331/2021, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral atendió el requerimiento. (Fojas 255-262 del expediente).

XXIII. Requerimiento de información al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática.

- a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31852/2021, se le requirió información al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática respecto de los hechos denunciados. (Fojas 215-222 del expediente).
- b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral atendió el requerimiento. (Fojas 384-385 del expediente).

XXIV. Requerimiento de información al C. Juan Nieblas Meza.

- a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México notificara el requerimiento realizado al C. Juan Nieblas Meza a efecto de que rindiera información de los hechos denunciados en el escrito de queja. (Fojas 263-266 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

- b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JDE07-MEX/VS/0494/2021, se notificó por estrados al C. Juan Nieblas Meza el requerimiento de información. (Fojas 306-319 del expediente).
- c) El tres de julio de dos mil veintiuno, el C. Juan Nieblas Meza se apersonó en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, con la finalidad de notificarse el oficio INE-JDE07-MEX/VS/0494/2021. (Fojas 320-321 del expediente).
- d) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C. Juan Nieblas Meza, atendió el requerimiento de información realizado a través del oficio INE-JDE07-MEX/VS/0494/2021. (Fojas 322-326 del expediente).
- e) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-MEX/VE/UTF/222/2021, signado por el enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México, se remitieron las constancias de notificación y la contestación del C. Juan Nieblas Meza. (Foja 304-305 del expediente).

XXV. Requerimiento de información a la C. Joanna Alejandra Felipe Torres.

- a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31849/2021, se le requirió información a la C. Joanna Alejandra Felipe Torres respecto de los hechos denunciados. (Fojas 267-274 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

XXVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).

- a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1047/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si se encontraba registrado en el SIF alguna aportación realizada por el C. Juan Nieblas Meza a la coalición “Va por el estado de México” y/o a sus candidatos, así como si en el mismo se encontraban registrados gastos por concepto de publicaciones en periódicos. (Fojas 276-282 del expediente).

- b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2525/2021, la Dirección de Auditoría, atendió lo solicitado, informando que no se encontró registrado en el SIF alguna aportación realizada por el C. Juan Nieblas Meza, ni registro en la contabilidad de gastos por concepto de publicidad en periódicos, específicamente del periódico Punto Medio. (Fojas 386-391 del expediente).

XXVII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral (en adelante Oficialía Electoral).

- a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30422/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Oficialía Electoral realizara la certificación del ejemplar del periódico proporcionado en el escrito de queja y detallara la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado (Fojas 283-297 del expediente).
- b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/2030/2021, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, informó que la documentación fue recibida y registrada, remitiendo el acuerdo de admisión correspondiente. (Fojas 392-396 del expediente).
- c) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/2105/2021, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, atendió lo solicitado remitiendo original del acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/459/2021 y un disco compacto. (Fojas 397-411 del expediente).

XXVIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de Prerrogativas).

- a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31850/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Prerrogativas, informara si el C. Juan Nieblas Meza se encontraba registrado en el padrón de afiliados o militantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Fojas 298-303 del expediente).
- b) El dieciocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9309/2021, la Dirección de Prerrogativas, atendió lo solicitado, informando que no se encontró coincidencia dentro de los registros

“válidos” del padrón de personas afiliadas (militantes) al Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática respecto al C. Juan Nieblas Meza. (Fojas 415-421 del expediente).

XXIX. Acuerdo de Alegatos

- a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 327-328 del expediente).
- b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35242/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Francisco Brian Rojas Cano, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 357-363 del expediente).
- c) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35240/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Karla Leticia Fiesco García, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 364-371 del expediente).
- d) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35244/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 372-378 del expediente).
- e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35249/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 329-335 del expediente).
- f) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Partido de la Revolución Democrática presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Fojas 379-383 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

- g) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35250/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 343-349 del expediente).
- h) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio SFA/619/2021, el Partido Revolucionario Institucional presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Foja 422 del expediente).
- i) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35247/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido Acción Nacional, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 336-342 del expediente).
- j) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-443/2021, el Partido Acción Nacional presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Fojas 412-414 del expediente).
- k) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35253/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Morena, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 350-356 del expediente).
- l) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido escrito de alegatos presentado por los CC. Francisco Brian Rojas Cano, Karla Leticia Fiesco García, Joanna Alejandra Felipe Torres ni por parte del Partido Morena.

XXX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 423-424 del expediente).

XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo séptima sesión extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral, Doctora Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona y el Maestro Jaime Rivera Velázquez, así como la Doctora Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización.

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de Fondo. Que, una vez fijada la competencia, y no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si las Coaliciones “Va por México” y “Va por el Estado de México” integradas por los

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como sus candidatos a Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la C. Karla Leticia Fiesco García, a Diputado Local por el Distrito XLIII, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, omitieron registrar gastos por concepto de propaganda electoral publicada en el periódico Punto Medio o, en su caso omitieron rechazar una aportación de ente impedido consistente en la publicación de propaganda electoral en Punto Medio.

En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 121 y 127, numerales 1 a 3 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

*1. Son obligaciones de los partidos políticos
(...)*

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;”

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser

reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

“Artículo 121.

Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

j) Las personas morales.

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.

l) Personas no identificadas.”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

(...)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado Democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.

Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

Por otro lado, la premisa señalada en el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales dedicadas a realizar actos de comercio.

En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de personas morales, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares específicos. Debido a ello, los sujetos obligados transgredirían el principio mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad.

Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la misma como base de la responsabilidad del partido.

Dicho lo anterior, resulta evidente que una de las finalidades que persigue la legislación al señalar como obligación rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, el propósito es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

La normatividad en comento establece la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de, entre otros, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.

De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandados sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría los sujetos obligados, una sanción por la infracción cometida.

En resumen, dichos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los

institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Así pues, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve:

En el escrito de queja, el instituto político quejoso denuncia el presunto egreso no reportado o, en su caso, la presunta aportación en especie de un ente impedido derivado de una publicación realizada en el periódico Punto Medio, en la cual presume busca posicionar a los sujetos incoados, esto es, el promovente refiere que por medio de publicaciones realizadas a través del periódico “Punto Medio” en su ejemplar año 18, edición 768, de fecha 30 de abril de 2021, considera existe propaganda a favor de las personas denunciadas, al tratarse de contenido que promueve el voto a favor de los candidatos denunciados derivado de que, su contenido posiciona o beneficia de mejor forma a los candidatos denunciados y por el contrario, desalienta la preferencia hacia los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, con lo cual, a decir del quejoso, dicha situación se traduce en una presunta aportación en especie, misma que se encuentra impedida por la normativa electoral e influye de manera contundente en el ánimo del electorado en el territorio que abarca el Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de México

Para sostener sus afirmaciones, presentó como elemento de prueba un ejemplar del periódico “Punto Medio”, año 18, edición 768 de fecha 30 de abril de 2021; el cual será debidamente analizado en líneas subsecuentes.

De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los sujetos incoados; al respecto los partidos integrantes de la misma al dar respuesta manifestaron medularmente lo que se señala a continuación:

- **Partido Acción Nacional**

- Que no le asiste la razón al denunciante pues la aseveración de que los candidatos o el partido contrataron o adquirieron algún servicio es falsa.
- - Tal y como el propio quejoso lo señala se plantean notas e información de diversos partidos las cuales se pueden calificar tal vez como positivas, negativas o neutrales, más sin embargo no como propaganda o promoción.
- - Mi representada cumplió a cabalidad con los ordenamientos en materia de fiscalización.

- **Partido Revolucionario Institucional**

- Que no le asiste la razón al denunciante pues la aseveración de que mis representados, así como sus candidatos contrataron o adquirieron de forma indebida es falsa.
- - Tal y como el propio quejoso lo señala se plantean notas e información de diversos partidos las cuales se pueden calificar tal vez como positivas, negativas o neutrales, más sin embargo no como propaganda o promoción.
- - Mi representada, así como los candidatos señalados en ningún momento incurrieron en violaciones en materia de fiscalización.

- **Partido de la Revolución Democrática**

- Que lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentran ubicadas en modo, tiempo y lugar.
- Que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización SIF.
- En el convenio de Coalición electoral “Va por México”, se determinó que el Partido Acción Nacional, le correspondía postular las candidaturas, por ende dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidata denunciada.

La información remitida por los partidos incoados constituye documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de

Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Consecuentemente, esta autoridad electoral procedió a instaurar las líneas de investigación pertinentes, en los términos de las facultades constitucionales y legales conferidas, ello con el propósito de allegarse de los elementos de convicción idóneos para sustanciar y resolver el procedimiento de queja en cuestión.

En este contexto, se tiene que en el presente asunto se debe determinar:

- Si los medios impresos constituyen propaganda electoral, o en su caso, constituyen notas periodísticas realizadas en el ejercicio de los derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad en el trabajo.
- De constituir propaganda electoral, se debe verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por concepto de contratación de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos o, en su caso, si se trata de alguna aportación de ente impedido.
- Finalmente, de configurarse propaganda a favor de la parte denunciada, se procederá a cuantificar el monto involucrado y solicitar su acumulación al tope de gastos de campaña respectivo.

Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, la investigación se dirigió en un primer momento en el análisis del contenido de los textos denunciados, el cual se puede resumir en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1	ARTÍCULO 2
-------------------	-------------------

8 VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021 PUNTO MEDIO

"Paco Rojas Vive" mantiene sus jornadas de sanitización

Con el objetivo de contribuir en el combate a la propagación del Covid-19, la Asociación Civil "Paseo Resaca" ha mantenido varias jornadas de sanitización de calles y comercios, la asociación, en varias colonias y aplicó el producto en el mayor número de viviendas.

Durante la semana pasada, el equipo de la asociación estuvo en Calles del Llanito, Campea 1, Bellavista e Infante Centro, en donde las vecinas beneficiadas tuvieron la oportunidad de solicitar el servicio completamente gratis.

Desde que se instrumentó esta estrategia para ayudar a contener la propagación del virus, se han beneficiado más de 4 mil 500 puntos, en más de 32 jornadas realizadas a lo largo de todo el municipio.

Para solicitar este servicio, la asociación "Paseo Resaca" vive en la siguiente teléfono: 55-86-88-95, se recomienda que los organizen entre vecinos para que las visitas se aprovechen involucrando al mayor número de casas.



EL EQUIPO de trabajo en blanes recibidas por las vecinas.



Venidos de la colonia Combará y vecinos de la vivienda 106, son la oportunidad de participar en la jornada de esterilización y vacunación de mascotas, que viene realizando la Asociación Civil "Paseo Regio vive", esta, gracias a la gestión que se logró con el comité de Salud del Estado de México.

Hasta la fecha, se han atendido a por lo menos mil 800 mascotas, tanto felinas como caninas. Las intervenciones quirúrgicas son completamente gratuitas, además que agradecen los donativos de comida y ropa que se reparten libremente a la vez que consiguen la reproducción de los animales.

Para informes sobre este programa está en su c.d. 98-25.

posibilidad de calificar si se trata o no de un indicio, se debe ponderar las circunstancias que acontecen en el caso en concreto.

Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2014, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” en la que estableció lo que a continuación se transcribe:

“De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Por ello, resulta importante que esta autoridad precise que, derivado del análisis efectuado a las imágenes insertadas en el escrito de queja, se infiere que los señalamientos que se realizan son imprecisos, y vagos, toda vez que no se aporta respecto a cada una de las imágenes circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan verificar la veracidad de los hechos denunciados; asimismo, es importante señalar que en la especie, tampoco se aportan elementos de prueba distintos encaminados a demostrar los hechos denunciados, que al ser adminiculados permitan perfeccionar o corroborar la existencia de hechos materia del procedimiento sancionador en materia electoral.

Aunado a lo antes mencionado, se debe tener en cuenta que, del análisis efectuado a las grabaciones, se tuvo conocimiento que lo transmitido en el programa no son mensajes producidos para la difusión a través de un periódico sino que más bien se refiere a una cobertura noticiosa que, de conformidad con las imágenes antes insertadas, no era exclusiva para los sujetos denunciados, dado que existen menciones de más candidatos, como son la C. Érika Vianney López, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, Xóchitl Zagal R., y Daniel Serrano candidatos

postulados por Morena. De igual forma, se aprecia la existencia de notas relativas a sanitización y atención de mascotas.

De lo anterior, se cuentan con indicios de que el factor común en todas las notas y opiniones que conforman el periódico es que se trata de información que puede resultar relevante para las personas que habitan en Cuautitlán Izcalli, por lo que la publicación del contenido puede ir encaminada a comunicar toda la información que obtienen derivado del ejercicio periodístico que realizan, amparada bajo el derecho humano de libertad de expresión, en específico en lo atinente a la libertad de prensa, consagrada en el artículo 7 constitucional el cual dispone, esencialmente, que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

Robustece lo anterior que los hechos en los cuales se sustenta el escrito de queja no fueron narrados de manera clara, no fueron expresados detalles que permitan conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le permitieron inferir la existencia de una inserción pagada en el diario o, en su caso, que se configura una aportación a favor de los denunciados por parte del periódico y finalmente no se aportaron los elementos de prueba que soporten la aseveración de lo señalado en el referido escrito y que enlazadas entre sí, pudieran concluir que el ejemplar del periódico "Punto Medio", año 18, edición 768 de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, corresponde a una aportación de propaganda en favor de la coalición "Va por México". Asimismo, no da cuenta de si existen otros ejemplares de dicho periódico que publiquen notas en contra del Partido Morena y/o en favor de la coalición "Va por México" y/o sus candidatos para arribar a la conclusión de que el periódico es aportante de dicha coalición; tampoco refiere la cantidad o el aproximado de ejemplares que fueron entregados a la ciudadanía, ni el costo que en su caso tuvo el mismo, pues de las imágenes que contiene el escrito de queja, únicamente se advierte el ejemplar denunciado y su contenido.

Posteriormente esta autoridad electoral solicitó información al Partido Acción Nacional, respecto a las notas de opinión periodística sustentados en las pruebas ofrecidas por los quejosos, para que, en su caso, confirmara las publicaciones de las mismas e indicara quién contrató las publicaciones y la forma de pago. Al respecto, la representación del partido que no existe ninguna relación con el C. Juan Nieblas Meza, editor del periódico y no tienen conocimiento de dicha persona; así mismo confirman que no celebraron ningún contrato de prestación de servicios firmado con el periódico Punto Medio y tampoco existió ninguna aportación realizada por parte del titular del periódico Punto Medio.

En razón de lo anterior, se tiene que dichas notas periodísticas las cuales constituyen el único medio de prueba aportado por el quejoso, son producto de la labor periodística, en el ejercicio de los derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad en el trabajo.

A continuación, se plasma el análisis sobre el contenido de las publicaciones impresas, tomando como referencia el artículo 242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porción normativa que refiere qué se puede entender por propaganda electoral, a saber:

*“Artículo 242.
(...)”*

*3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
(...)”*


En la especie, y a efecto de realizar un análisis minucioso a las notas de opinión periodísticas aportadas por el hoy quejoso, sobre supuestas inserciones pagadas, fue necesario requerir información en relación a los hechos materia de investigación al Partido Acción Nacional como representante de ambas coaliciones y a los candidatos incoados. Así pues, el Partido dio respuesta en nombre de todos, en donde se advierte lo siguiente:

- No existe relación alguna con el editor del periódico Punto Medio, el C. Juan Nieblas Meza.
- No se celebró algún contrato de prestación de servicios con el Periódico Punto Medio para la publicación del 30 de abril de 2021, en su edición 768, año 18.
- Al no existir contrato alguno de igual manera no existe número de publicaciones contratadas o publicadas, ni fecha para llevarse a cabo.
- Así mismo confirman que no existió ninguna aportación realizada a título gratuito por parte del titular del periódico Punto Medio, por tanto tampoco existe contablemente ningún recibo de aportación.
- Se entiende entonces que las notas se realizaron en ejercicio de la labor periodística, amparada constitucionalmente en la libertad de expresión e imprenta.

Cabe señalar que el escrito de contestación, es valorado en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización por lo que constituye una documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente genera pleno valor probatorio si se encuentra apoyado con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

Es decir, como resultado de las diligencias realizadas en la investigación del presente procedimiento, esta autoridad no ha recabado evidencia que destruya la presunción *iuris tantum* de que las inserciones publicadas constituyeron notas periodísticas o informativas, actividad amparada por los principios constitucionales de libertad de prensa y libertad de expresión.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario analizar cada una de las inserciones a fin de tener certeza respecto a si el contenido de las mismas podía entenderse como resultado del ejercicio periodístico y la libre manifestación de ideas o, por el contrario, se trataba de contenido a través del cual se buscaba posicionar a las personas candidatas denunciadas, así como a la coalición que las postulaba; es decir, si cuenta con elementos que permitan presumir se trata de propaganda electoral. El análisis en comento se formula a continuación:

Artículo	Observación
<p>ACUSAN A DANIEL SERRANO DE EXTORSIONAR A “EDILES PUROS”</p> <p>El proceso interno de Morena, para seleccionar a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en el Estado de México, se vio “manchado” por presuntas violaciones a la convocatoria; la incertidumbre y denuncias de madruguetes y de imposiciones, no se hicieron esperar.</p> <p>En este marco acusaron de presuntos actos de extorsión al líder morenista de los llamados “Puros”, Daniel Serrano Palacios, quien habría pedido millones de pesos a algunos de los alcaldes afines a su grupo, para utilizarlos en esta campaña.</p> <p>La acusación más fuerte, la hizo la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Olga Medina, quien no sólo dijo que se le pidió dinero, sino que le ofrecieron “asesoría” para sacar los millones de pesos de las arcas municipales y no tener problemas.</p> <p>“Hasta aquí Daniel Serrano, se te acabó, el querernos extorsionar; afortunadamente yo nunca cedí a lo que pedía; pero ahora</p>  <p>DANIEL Serrano (Foto: Facebook).</p> <p>quería cobrar esos 2 millones y todo lo que pedía. Hasta enseñaban el método de cómo podíamos sacar recursos de las arcas públicas y yo me negué, por eso está enojado”, acusó en una declaración pública en la explanada del IEEM.</p> <p style="text-align: center;">Vea páginas 2 y 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Refiere que el proceso interno de Morena para seleccionar a sus candidatos se vio afectado por presuntas violaciones a la convocatoria. • Se refiere que el “líder” de los “Puros” habría pedido millones de pesos a algunos de los alcaldes afines a su grupo. • Se hace mención que se ofrecía asesoría a efecto de verificar el método para sacar los millones de pesos de las arcas municipales • No se aprecia que se haga mención al Proceso Electoral, o si alguno de los mencionados está participando como candidato. Tampoco se aprecian comentarios a favor o en contra de una Plataforma Electoral.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

Artículo	Observación
<p>QUIÉN ES QUIÉN EN EL DISTRITO 7</p> <p>Vea páginas 4 y 5</p>  <p>JOANNA FELIPE TORRES, "VA POR MÉXICO"</p> <p>XÓCHITL ZAGAL RAMÍREZ, MORENA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hace un comparativo entre las candidatas postuladas por la Coalición Va por México y Morena a la Diputación del Distrito 7 del Estado de México. • No se aprecian comentarios a favor o en contra de alguna de las candidatas, quienes le postulan a un cargo de elección popular ni su Plataforma Electoral.
<p>Fuertes señalamientos contra líder de "Los Puros"</p> <p>Marco Galindo, quien era uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, se quejó de la forma en que se llevó el proceso interno en donde, Daniel Serrano Palacios, quien fungía como representante del partido ante el IEEM, aprovechó su posición para "autorregistrarse" como candidato; acción que calificó como una "autoimposición".</p> <p>El presidente de la AC Unidos, ofreció una conferencia de prensa en donde explicó cómo se llevó a cabo el proceso interno y del acuerdo que se tomó entre los 4 finalistas, que no se respetó.</p> <p>Vea página 3</p>  <p>MARCO Galindo ofreció una conferencia de prensa para hablar del proceso interno de Morena; se declaró ganador de la encuesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marco Galindo, aspirante a la candidatura municipal de Cuautitlán Izcalli se quejó de la forma en que se llevó a cabo el proceso interno de selección. • No se aprecian comentarios a favor o en contra de alguna de los candidatos postulados a cargos de elección popular ni su Plataforma Electoral.
<p>Denunciaron a Daniel Serrano ante Fiscalía; Núñez presentó quejas</p> <p>RECLAMA "CONFLICTO DE INTERESES" DEL REPRESENTANTE DE MORENA</p> <p>El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli con licencia y aspirante de Morena para la reelección, Ricardo Núñez Ayala, presentó una denuncia formal ante la FEDE (Fiscalía Especial de Delitos Electorales) en contra de Daniel Serrano Palacios, por los "señalamientos y conductas que pueden ser constitutivas de delitos graves en materia electoral", que se hicieron públicas el domingo pasado por parte de la alcaldesa de Los Reyes La Paz y por la publicación de un audio de la edil de Teoloyucan, en donde el líder de los llamados "Puros", habría solicitado millones de pesos para las campañas electorales.</p> <p>Ricardo Núñez Ayala ofreció la tarde del lunes una conferencia de prensa, en la que se quejó de que, en este proceso interno de Morena para elegir a los candidatos, Daniel Serrano fue "juez y parte" y tuvo un "conflicto de intereses", toda vez que el mismo, aspiraba a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli.</p> <p>El alcalde con licencia, ve violentados sus derechos políticos-electorales, por que la Comisión Nacional de Elecciones, no respetó</p>  <p>Ricardo Núñez Ayala, presentó la denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales.</p> <p>los tiempos marcados en la convocatoria y tampoco, les notificaron el resultado de la supuesta encuesta que se iba a hacer para determinar a los candidatos; el plazo para ello, era el 25 de abril, cosa que no ocurrió.</p> <p>Ricardo Núñez acusó que, este conflicto de intereses, provocó que se llevara a cabo un "procedimiento interno viciado", que también fue denunciado ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido y ante la Comisión Nacional de Elecciones.</p> <p>Según explicó de todos los aspirantes que tuvieron la intención de reelegirse en el Estado de México, sólo él fue excluido de esa posibilidad; y a su juicio, fue porque el representante del partido ante el IEEM y líder de los llamados "Puros", tenía la intención de ser el candidato de Morena a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli.</p> <p>Ricardo Núñez dijo que no se puede permitir la "imposición de personas" y se pugnar por procesos internos limpios y transparentes en Morena; en este sentido, confió que las instancias, tanto las partidarias como la Fiscalía, se pronunciarán e investiguen el caso para corregir esta situación.</p> <p>El partido, admitió, está en una situación muy difícil derivado de los señalamientos en contra de Daniel Serrano, lo cual afecta la "idoneidad" de su eventual candidatura. Ricardo Núñez anunció que ese mismo día, acudiría a la FEDE a denunciar, cosa que si hizo; y también, anunció la realización de una manifestación en la plancha del Zócalo capitalino para el martes, actos que realizó en compañía de vecinos y militantes. Después de su protesta, acudió al partido a presentar sus quejas.</p> <p>Ricardo Núñez confió en que se "rectificará" la candidatura, porque existen todos los elementos para ello. Y fue más allá, al sugerir que las acusaciones en contra de Daniel Serrano en el sentido de exigir dinero para la campaña, tienen sentido y se ven reflejadas en Cuautitlán Izcalli, ya que tiene un despliegue publicitario que ni él ha hecho, en una proporción del 10 por ciento, durante las dos campañas que hizo para la alcaldía en años anteriores. "Quién pompo" toda esa publicidad, se preguntó parafraseando a Andrés Manuel López Obrador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricardo Núñez Ayala presentó denuncia formal ante la FEDE en contra de Daniel Serrano por los hechos que podrían ser constitutivos de delitos, al presuntamente solicitar dinero para las campañas locales

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

[illegible]

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

Artículo	Observación
<p>Urge gestionar recursos para proyectos de agua y para seguridad: Erika</p> <p>Con el objetivo de hacer presencia y promover el voto en favor del Partido Verde y de su candidata a la diputación federal del Distrito 7, Erika Vianey López, el sábado pasado se llevó a cabo una caravana o rodada por algunas de las principales vialidades de Cuauhtlém local.</p> <p>La candidata a la diputación federal del Distrito 7 de Cuauhtlém local, por el Partido Verde, Erika Vianey López, sostiene que "la grave escasez de agua en Cuauhtlém local es un problema que está afectando a muchas colonias del municipio, por lo que, de llegar al Congreso, pugnará por la gestión de recursos para invertir en más infraestructura y que haya más vitalidad".</p> <p>De igual forma, comentó que dentro de las principales demandas de la gente, están la relación con el tema de la seguridad para la cual, también se requiere invertir en equipamiento y capacitación de los cuerpos policíacos.</p> <p>Erika Vianey López participó en una "caravana" de moto y vehículo, que recorrió algunas de las vialidades principales del municipio. El recorrido comenzó frente a la empresa forestal, y culminó al final de la avenida Huasteco, ante un grupo de los habitantes de la colonia.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Se da cobertura noticiosa a un evento celebrado por la C. Érika Vianey López, candidata postulada por el Partido Verde Ecologista de México, consistente en una caravana de motos y vehículos. Comentó que dentro de las demandas de la población se encuentra la seguridad y la escasez de agua

En ese sentido, es que en la especie existen elementos que permiten presumir que en la especie las publicaciones son evidencia de que sólo se realizaba una cobertura informativa, amparada bajo el derecho humano de libertad de expresión, en específico en lo atinente a la libertad de prensa, consagrada en el artículo 7 constitucional el cual dispone, esencialmente, que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. En consecuencia, en ningún momento se observó algún tipo de erogación por concepto de inserciones en prensa.

De igual forma el precepto legal en comento, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público).

Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información. En el mismo artículo 6° Constitucional, se dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; y se ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza. Asimismo, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla.

Conforme al artículo 13, párrafo 2, de la Convención, se establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
- b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En materia de interpretación normativa electoral, debe establecerse un principio general de ponderación normativa de máxima protección a la labor periodística responsable con lo que se cumple a cabalidad el mandato constitucional *pro personae* en favor de los profesionales de la comunicación, pero también de la sociedad en su conjunto, y se establecen las condiciones fundamentales del dialogo político electoral plural, abierto, efectivo y concluyente.

Así, la autoridad debe realizar un examen cuidadoso de los derechos fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad de expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse en forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de potenciar su ejercicio.

Esta autoridad ha considerado que, en los ejercicios de ponderación, debe respetarse el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada asunto; en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía que están confrontados.

Es decir, para determinar si un mensaje, publicación, inserción, escrito, imagen o expresión constituye propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos de tal naturaleza.

En este sentido, la libertad de expresión es un derecho fundamental del ciudadano, cuyo ejercicio debe ser garantizado y potenciado para la consolidación de una sociedad democrática. Esto es, la libertad de expresión comprende tres distintos derechos:

1. El de buscar informaciones e ideas de toda índole.
2. El de recibir informaciones e ideas de toda índole.
3. El de difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino que incluye el derecho a comunicarla por cualquier medio.

En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello debido a que es esencial al debate democrático que se permita la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.

Así, en materia político-electoral, se permite a los titulares de los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos, entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra opción política.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuál es el vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, en relación con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, en cuanto al

contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, donde la libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa".

Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.

Dicha libertad tiene una dimensión individual porque está referida al derecho de expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que comprende el derecho de transmitir dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o colectividad conozca dichas ideas. La libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos-, la libertad de expresión implica, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Respecto de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte Interamericana ha señalado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer

opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones -ha considerado la Corte- tienen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos en el artículo 13 de la invocada Convención.

La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a expresar convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se ve aún más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución Federal, así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y suscritos por el Estado mexicano.

En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales, toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen en la sociedad.

Ahora bien, con relación a la propaganda electoral, este Consejo General ha determinado que, para que una nota periodística sea considerada como genuinamente de carácter noticioso o propaganda electoral, debe contener las características del género periodístico de la noticia o nota informativa genuina.²

Los elementos del hecho noticiosos son:

- El hecho: qué ha sucedido.
- El sujeto: quién realizó la acción.
- El tiempo: cuándo sucedió.
- El lugar: dónde se llevó a cabo.
- La finalidad: para qué o por qué se efectuó.
- La forma: cómo se realizó.

La estructura de la noticia se conforma por:

² Criterio sostenido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en el acuerdo CG154/2013.

- La cabeza o titular: es la llamada de atención con que los medios informativos anuncian la noticia.
- La entrada: es el primer párrafo donde idealmente se da a conocer lo más sobresaliente del hecho que se informa.
- El cuerpo: es el desarrollo de la noticia.
- El remate: contiene un dato secundario pero concluyente.

Por otra parte, este Consejo General y el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral han indicado en diversos criterios³ que:

“... no puede darse el mismo tratamiento a las expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.”

Por lo arriba expresado, y de una valoración conjunta del reconocimiento de la empresa editorial sobre la existencia de las publicaciones investigadas, así como de las muestras remitidas, y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, este Consejo General tiene por acreditada que la publicación de las notas periodísticas constituyen una libertad de expresión de quien las edita y publica, pues aun cuando el quejoso argumenta en su escrito, que dichas notas podrían constituir infracciones a la normativa electoral, por la contratación de propaganda en medios impresos, soportando su dicho con la aportación de notas periodísticas del diario de circulación local, mismos que solo generalizan una información de quien las edita y publica, ya que el contenido de ellas es imputable al autor; mas no así, a quienes se vean involucrados en la noticia correspondiente.

Aunado a lo anterior, de las notas periodísticas referidas, no se desprende como principal propósito posicionar ante la población a un partido o candidato en

3 SUP-RAP-09/2004, SUP-RAP-190/2009, SUP-RAP-196/2009, SUP-RAP-203/2009 y CG313/2009

específico; lo anterior derivado de que no contienen las palabras “voto” o “votar”, “sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus sinónimos, ni mucho menos contiene la difusión de la Plataforma Electoral ni el logotipo del partido o del candidato, esto es, pues del análisis a las notas se desprende que el objeto es informar al público a través de la libre difusión de ideas de los autores y del medio que lo publica.

Al respecto, la Sala Regional Monterrey, mediante Juicio de Inconformidad, bajo el número de expediente SM-JIN-0054/2015, consideró lo siguiente respecto a las notas de opinión periodística:

- No existen disposiciones legales que regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las notas informativas, como tampoco existe un tipo administrativo sancionador en el que se encuadren ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico.
- La actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir intereses imperativos en una sociedad democrática que se requieran salvaguardar y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de éstos, no toda expresión supone una vulneración a dicho principio, pues para ello es necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan.
- El derecho a informar y ser informado comprende, durante los procesos electorales, la difusión de las ideas de los actores políticos y la cobertura noticiosa de sus actos, declaraciones y entrevistas, siempre que no se demuestre que se está en presencia de actos de simulación o auténticos fraudes a la Constitución Federal y a la ley, por tratarse de propaganda encubierta, porque entonces se subvierten los principios y valores que ahí se reconocen como propios de un régimen democrático y constitucional.
- La cobertura que hacen los medios de comunicación impresa a las actividades del Proceso Electoral, así como a los partidos políticos y sus candidatos, implica una actividad propia de la difusión de ideas a través de periodistas y comentaristas dentro del ámbito de libre expresión de pensamiento e información. Estos periodistas y comentaristas cuentan con libertad para destinar un mayor o menor espacio informativo a los acontecimientos que consideren noticia, así como a sus opiniones editoriales

y a transmitir las expresiones del libre ejercicio periodístico, siempre que no sean contrarias a la dignidad de la persona.

- Los medios de comunicación tienen la libertad de seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos relevantes, así como de repetir y ampliar las informaciones sin límites precisos. También pueden adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en discusión la agenda política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, resaltar u opacar datos e informaciones, e inclusive cuestionar las acciones y propuestas de una candidatura.

Así, la autoridad jurisdiccional concluye que los textos argumentados en el escrito de queja, no pueden considerarse propaganda electoral, ya que es un comunicado de prensa que incluye las opiniones, puntos de vista y críticas de quien los redacta, los cuales se realizaron como parte del ejercicio de la libertad de expresión, amparado bajo el derecho a la información.

En conclusión, esta autoridad pudo determinar que, los desplegados no pueden ser calificados como propaganda electoral, ya que del contenido de los mismos no pueden advertirse alguno de los elementos necesarios para ser considerada como tal, es decir nombre del candidato (si viene en una nota periodística), logotipo del partido, mención de la Plataforma Electoral y/o inclusión de frases o palabras como vota o votar, para acreditar que se trataran de este tipo de propaganda.

Esta autoridad determinó que los contenidos de dichos desplegados en ningún momento pretenden influenciar al público para que vote por determinado instituto político y/o candidato y, en consecuencia, no generaron ningún beneficio para la Coalición “Va por el Estado de México”, así como de sus candidatos a Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la C. Karla Leticia Fiesco García, a Diputado Local por el Distrito XLIII, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, ya que las mismas fueron notas periodísticas cuyos fines son meramente informativos para la ciudadanía. Aunado a lo anterior, el escrito de contestación recabado en el marco de la sustanciación del presente procedimiento, generan certeza respecto al contenido noticioso de las inserciones en ellos publicadas.

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten determinar lo siguiente:

- Que esta autoridad no cuenta con elementos para determinar que la cobertura periodística realizada por el periódico “Punto Medio” vaya más allá del ejercicio del derecho a la libertad de prensa, al no existir elementos objetivos que permitan verificar que en la especie existió propaganda electoral realizada.

Por lo anteriormente expuesto, y derivado del estudio realizado al contenido de las inserciones objeto de denuncia, en el cual se tomaron en cuenta las características del contenido denunciado, este Consejo General concluye que las mismas constituyeron notas periodísticas, no propaganda electoral, ya que carece de elementos que posicionen al candidato denunciado ante el electorado.

En razón de lo vertido anteriormente, este Consejo General considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora por parte de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, como integrantes de las coaliciones denunciadas, así como de sus candidatos a Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la C. Karla Leticia Fiesco García, a Diputado Local por el Distrito XLIII, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 121 y 127, numerales 1 a 3 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que la coalición “Va por el Estado de México”, por ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse **infundado**.

3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de las Coaliciones “Va por México” y “Va por el Estado de México”, integradas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de sus candidatos a Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la C. Karla Leticia Fiesco García, a Diputado Local por el Distrito XLIII, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a Diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, en los términos del **Considerando 2**.

SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena, así como a los CC. Karla Leticia Fiesco García, el C. Francisco Brian Rojas Cano y a la C. Joanna Alejandra Felipe Torres la presente Resolución, en términos de lo expuesto en el Considerando **3** de la presente Resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/291/2021/EDOMEX

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**